

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

WT/CTE/M/12

21 de octubre de 1996

(96-4380)

Comité de Comercio y Medio Ambiente

INFORME DE LA REUNIÓN CELEBRADA DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1996

Nota de la Secretaría

1. El Comité de Comercio y Medio Ambiente se reunió del 11 al 13 de septiembre de 1996 bajo la presidencia del Embajador Juan Carlos Sánchez Arnau, de la Argentina. Se aprobó el orden del día de la reunión, reproducido en el aerograma WTO/AIR/403.

Puntos Primero La relación entre las disposiciones del sistema multilateral de comercio y las Quinto medidas comerciales adoptadas con fines ambientales, con inclusión de las adoptadas en aplicación de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente; y

La relación entre los mecanismos de solución de diferencias del sistema multilateral de comercio y los previstos en los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente

2. El representante de los Estados Unidos presentó el documento no oficial de su delegación (de fecha 11 de septiembre de 1996) en el que se proponía cierto número de principios que se referían a la relación entre los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA) y la OMC para su inclusión en un marco convenido que debía presentarse a los ministros para su aprobación.

3. El representante del Japón dijo que la OMC debía demostrar su voluntad de hacer frente a los nuevos problemas, especialmente al del comercio y el medio ambiente, y que los resultados de los debates del Comité de Comercio y Medio Ambiente influirían en la credibilidad de la OMC. Los progresos que hiciera el Comité en relación con el primer punto debían reflejarse plenamente en la Sección III de su Informe a la Conferencia Ministerial de Singapur (el "Informe"), en el que podrían basarse los futuros debates sobre este punto. El Japón propuso incluir los siguientes elementos en la Sección III: i) debería establecerse un mecanismo para fomentar el diálogo y la cooperación entre los AMUMA y la OMC, ampliándose, según sea necesario, el mandato del Comité; ii) era necesario establecer ciertas disciplinas para hacer más previsible y dar más estabilidad a la relación entre las medidas comerciales en cumplimiento de los AMUMA y la OMC; iii) el enfoque diferenciado (es decir, la distinción entre las medidas comerciales entre Partes en un AMUMA y entre Partes y no partes, y la distinción basada en el carácter específico de la medida comercial) debía servir de base para lograr un consenso sobre las posibles disciplinas relacionadas con las medidas comerciales adoptadas en aplicación de los AMUMA y la OMC; iv) en lo concerniente al enfoque diferenciado, en los futuros trabajos debía darse prioridad al problema de la relación Parte-no parte, y; v) para lograr que las políticas comerciales y ambientales se apoyen mutuamente, la OMC debía garantizar que ninguna disciplina sería más restrictiva para los AMUMA que el *status quo*.

4. El representante de Nueva Zelandia dijo que se había sugerido una serie de criterios para abordar este punto, y seguía habiendo divergencias de opiniones que se mantenían con firmeza. Además del criterio sugerido por los Estados Unidos, es decir la presentación de algunos "temas principales" para su aprobación ministerial, Nueva Zelandia consideraba que sería útil concentrarse en la tarea de encontrar un terreno común en Singapur basado en un examen de las diferentes categorías de medidas comerciales. Algunas de estas categorías podrían tratarse antes de Singapur y las otras después de la Conferencia Ministerial. Este procedimiento era útil puesto que existía un problema que debía resolverse, y en Singapur debería adoptarse un conjunto de medidas listas para su aplicación. Según las indicaciones actuales, era poco probable que ese conjunto de medidas resolviera el desacuerdo fundamental que existe acerca de la compatibilidad del derecho internacional correspondiente. Si se pasaba por alto esta cuestión, se dejaría una herencia dudosa para las comunidades del comercio y el medio ambiente. Por ejemplo, continuaría la negociación de medidas comerciales en los AMUMA cuya posición frente a las normas de la OMC era incierta, lo que disuadiría a algunos países a firmar los AMUMA. En efecto, el Comité de Comercio y Medio Ambiente sostendría que se trata de un tema cuya solución dejaría al proceso de solución de controversias. Podría ser difícil pero no era prematuro tratar este asunto. Un resultado de *status quo* que tratara de hacer algo más que reflejar conclusiones comunes podría constituir una interpretación, lo que era no hacer nada. Aunque un no "hacer nada" debidamente matizado podría constituir un resultado aceptable en Singapur, el representante preguntó si éste era todo el alcance de la visión colectiva del Comité. Un mejor criterio sería presentar resultados modestos pero tangibles que demostraran la seriedad con que el Comité de Comercio y Medio Ambiente abordaba esta cuestión. Nueva Zelandia consideraba útil una declaración en el sentido de que medidas comerciales concretas concertadas entre las partes en un AMUMA probablemente no representarían un problema efectivo de coherencia con la OMC. Este criterio era posible y práctico y tenía en cuenta el deseo de que las normas de la OMC no disminuyeran la capacidad de los AMUMA para alcanzar sus objetivos ambientales. Otra posibilidad era referirse a observaciones de hecho sobre el problema OMC-AMUMA que fueran resultado del análisis del Comité de Comercio y Medio Ambiente. Aunque quizás no sería posible tratar a fondo el problema de las no partes, si se acordara que el Comité debería presentar resultados creíbles, podría reconocerse este hecho y llegar a un acuerdo acerca de la necesidad de ocuparse de esta cuestión después de Singapur.

5. El representante de las Comunidades Europeas dijo que su delegación tenía grandes expectativas respecto de los resultados que pudieran obtenerse sobre este punto. El criterio del Comité, que figuraba en un documento no oficial (de 23 de febrero de 1996) sobre la forma de tratar la relación existente entre los AMUMA y la OMC, se basaba en ciertas hipótesis filosóficas. Era indispensable presentar resultados que fueran creíbles sobre cuestiones controvertidas, entre ellas los AMUMA. Teniendo presente este hecho, las CE estaban dispuestas a esforzarse por lograr el mejor resultado posible en Singapur. Los resultados deberían ser equilibrados y constituir un todo. Si las expectativas respecto del primer punto no tuvieran otra finalidad que llegar a una declaración normativa con arreglo a las propuestas de los Estados Unidos y Australia, tampoco podría esperarse obtener resultados más ambiciosos respecto de otros puntos.

6. El representante de Australia dijo que su delegación examinaría la propuesta de los Estados Unidos, que presentaba el tipo de solución que podría ser útil para el Comité de Comercio y Medio Ambiente. Se trataba sobre todo de presentar resultados que fueran realistas, exponer las divergencias de opiniones y ofrecer resultados tangibles, gracias a los cuales la OMC reconocería las dificultades y seguiría esforzándose por resolverlas.

7. El representante de Suiza consideró que si bien el tipo de solución propuesta por los Estados Unidos era minimalista, ofrecía una base para obtener resultados tangibles. Aunque era cierto que en el Comité de Comercio y Medio Ambiente existían divergencias y las posiciones no eran muy lejanas, tal como lo había reconocido Nueva Zelandia, el Comité se enfrentaba con un problema difícil al que tendría que hacer frente. Suiza estimaba que se trataba de definir la relación jurídica entre los dos tipos de acuerdos internacionales, la OMC y los AMUMA. Desde este punto de vista, un resultado que sería una declaración de política sobre los aspectos menos problemáticos de esta cuestión no permitiría obtener una solución duradera y no era satisfactorio. Sería necesario hacer nuevos esfuerzos por llegar a un consenso sobre los aspectos jurídicos. Si bien sería difícil hacerlo en el tiempo disponible, cualquier acuerdo al que se llegara en Singapur no debería cerrar puerta alguna, y en cambio debería proporcionar una plataforma para seguir

trabajando en este campo con el propósito de llegar a soluciones concretas. Suiza apoyaba las observaciones hechas por el Japón en el sentido de que debía enviarse un mensaje claro a los ministros sobre la necesidad de incrementar la cooperación entre la OMC y los AMUMA, con arreglo a los lineamientos trazados en el documento no oficial de Suiza (de 20 de mayo de 1996).

8. El representante de Corea dijo que las divergencias existentes en las propuestas relativas a este punto no podían atribuirse a factores técnicos sino a aspectos sistémicos, jurídicos y políticos. Como consecuencia de ello era poco probable que las cuestiones relativas al primer punto se resolvieran por completo en Singapur, aunque se estaba logrando un cierto consenso sobre cuestiones tales como la necesidad de evitar el unilateralismo y fomentar la transparencia. Los esfuerzos del Comité de Comercio y Medio Ambiente habían permitido hacer progresos importantes, habían hecho realidad varias opciones y determinado sus méritos y sus limitaciones. La Conferencia Ministerial debería tomar nota de los progresos realizados sobre este punto y tomar la decisión de continuar el trabajo en el Comité, entre otras cosas sobre: i) un análisis de todas las opciones contenidas en las propuestas, teniendo en cuenta las preocupaciones expresadas, en particular en la Sección II del Informe; ii) los análisis basados en elementos tales como la especificidad y las medidas comerciales adoptadas entre partes en los AMUMA o entre no partes, tal como se había indicado en las propuestas de Corea y Nueva Zelandia; y iii) modalidades para promover la cooperación entre la OMC y los AMUMA a fin de aumentar la transparencia.

9. El representante de los Estados Unidos dijo que su delegación no buscaba una solución minimalista, y su documento no oficial proponía un punto a partir del cual tratar de lograr el nivel más alto posible de consenso.

Segundo Punto La relación entre las políticas ambientales relacionadas con el comercio y las medidas ambientales que tengan efectos comerciales significativos, y las disposiciones del sistema multilateral de comercio

10. El representante de los Estados Unidos dijo que la Conferencia Ministerial debería apoyar el concepto de exámenes ambientales de los acuerdos comerciales, tal como lo había hecho la Comisión de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible y otras organizaciones. A este respecto, los Estados Unidos habían distribuido un documento no oficial (de 11 de septiembre de 1996) que contenía un proyecto de decisión sobre exámenes ambientales.

11. El representante de Noruega dijo que las recomendaciones a los ministros deberían incluir exámenes ambientales de los acuerdos comerciales en el contexto de una mayor liberalización del comercio.

12. El representante de México recordó las observaciones hechas por su delegación en reuniones anteriores sobre los exámenes ambientales de los acuerdos comerciales.

Punto Tercero b) La relación entre las disposiciones del sistema multilateral de comercio y las prescripciones aplicadas con fines ambientales a los productos, con inclusión de normas y reglamentos técnicos y prescripciones en materia de envase y embalaje, etiquetado y reciclado

13. El representante de los Estados Unidos presentó el documento no oficial de su delegación (de 11 de septiembre de 1996) que contenía un proyecto de decisión sobre transparencia del etiquetado ecológico, basado en una propuesta anterior de los Estados Unidos (WT/CTE/W/38). En vista del desacuerdo existente sobre el ámbito de aplicación del Acuerdo OTC y sin proponer otro requisito de notificación, los Estados Unidos indicaban que debía tratarse de una decisión ministerial en la que se pudiera llegar a un acuerdo sobre la importancia de la transparencia. En las consultas realizadas por su delegación con el sector privado sobre esta cuestión, las comunidades ambientales y comerciales y los grupos de consumidores habían indicado que el fomento de la transparencia satisfacía sus objetivos.

14. El representante de las Comunidades Europeas dijo que el documento no oficial de su delegación sobre etiquetado ecológico (de 23 de julio de 1996) indicaba que podría no ser conveniente tratar el problema de la transparencia sin aclarar antes la situación de los instrumentos de evaluación del ciclo de vida en el etiquetado voluntario. Aunque la propuesta de los Estados Unidos no coincidía con esta idea, las Comunidades Europeas reconocían que contenía algunos elementos útiles. Por las razones indicadas al tratar el primer punto, las Comunidades Europeas no estaban convencidas de que sería conveniente adoptar una decisión concreta sobre etiquetado ecológico en Singapur. En esta etapa, era preferible tratar el problema del etiquetado ecológico en la Sección II del Informe, que podría incluir algunas conclusiones normativas para su examen por los ministros, dependiendo de la forma del Informe y de los resultados obtenidos respecto de otros puntos. Las Comunidades Europeas no consideraban que los elementos de la elaboración de un etiquetado ecológico enumerados en la propuesta de los Estados Unidos constituirían una situación independiente en la elaboración de programas de etiquetado ecológico, por ejemplo, la forma en que se tenían en cuenta las prácticas ambientales no nacionales al determinar la elegibilidad del producto era un requisito horizontal.

15. El representante del Canadá respondió a las observaciones hechas al proyecto de decisión de su delegación sobre etiquetado ecológico (WT/CTE/W/38-G/TBT/W/30). Muchas delegaciones habían puesto en tela de juicio el enfoque por etapas del etiquetado ecológico, con arreglo al cual el Comité de Comercio y Medio Ambiente se pondría de acuerdo en Singapur sobre los requisitos de notificación y trataría después de Singapur los criterios relacionados con el ciclo de vida y los procesos y métodos de producción (PMP) no relacionados con productos. Este método no prejuzgaría el problema de los PMP no relacionados con productos. Si bien era evidente que las medidas que tratan de "los requisitos de etiquetado en cuanto se aplican a un producto, proceso o método de producción" entraban en general en el ámbito del Acuerdo OTC, era menos evidente que ese alcance se extendiera a todas las medidas relativas a cualquier PMP, incluidos los que no estaban relacionados con productos, en especial en lo que se refería a las normas, en vista de la ambigua redacción de la definición contenida en el anexo 1 del Acuerdo OTC. El proyecto de decisión del Canadá se basaba en esta distinción. El Comité de Comercio y Medio Ambiente estaría en condiciones de aceptar que los programas de etiquetado ecológico, así como otros programas de etiquetado, entraban en el ámbito general del Acuerdo OTC sin prejuzgar si estaban incluidas las normas concretas de etiquetado ecológico basadas en PMP no relacionados con productos. Si bien el Comité de Comercio y Medio Ambiente podría convenir en que no estaba de acuerdo con la afirmación de que el Acuerdo OTC abarcara estas últimas, esto no debería impedir que se reconociese que los programas de etiquetado ecológico deberían establecerse de conformidad con las disposiciones del Acuerdo OTC. Dentro del ámbito de los programas de etiquetado ecológico no sería posible separar los criterios de productos basados en resultados y los basados en PMP no relacionados con productos. La sugerencia hecha por las Comunidades Europeas para establecer un código paralelo de conducta para los programas de etiquetado ecológico significaba separar los criterios sobre productos basados en sus resultados del Acuerdo OTC a pesar de que eran normas como las demás. Esto podría dar lugar a la búsqueda de un foro adecuado y probablemente a obligaciones opuestas o disminuidas. La propuesta de los Estados Unidos para aumentar la transparencia podría complementar las disciplinas básicas del OTC. Sin embargo, esta propuesta no era viable individualmente y podría alentar a los que favorecen un código paralelo de conducta.

16. Existía la preocupación de que una acción para reconocer los análisis del ciclo de vida y el posible uso de PMP no relacionados con productos en los programas voluntarios de etiquetado pudieran crear precedentes en otros lugares. El Canadá reconocía y compartía, hasta cierto punto, estas preocupaciones en lo que respecta al concepto de "producto afín". El enfoque del Canadá reflejaba las necesidades comerciales de su industria de productos forestales para atender las demandas del mercado, aunque otras industrias, tales como las industrias químicas, textiles y de productos del consumidor, se habían enfrentado con problemas similares. Por ejemplo, el papel tenía las mismas características físicas, ya sea que fuera producido a partir de bosques sometidos a una gestión sostenible, y se utilizara una tecnología de blanqueado al cloro u otra tecnología, y cualquiera que fuera el porcentaje del contenido de fibra reciclada. Sin embargo, los consumidores habían demostrado una preferencia por lo que consideraban un papel ambientalmente preferible que pertenecía a la categoría de PMP no relacionados con productos. La industria canadiense había respondido a esta realidad del mercado y su preocupación había pasado de los

"productos afines" a la equivalencia. Para el sector comercial, el problema consistía en saber si la diferenciación de los productos sobre la base de PMP no relacionados con productos reflejaba diferencias en las capacidades de absorción ambiental y los requisitos normativos existentes entre países. La preocupación ya no era saber si esa diferenciación de procesos era válida sino asegurar que esa diferenciación no se utilizaba abusivamente por razones proteccionistas.

17. Otra preocupación era el temor de los países en desarrollo en relación con las normas laborales, temor que compartía por lo menos un país desarrollado, aunque desde un punto de vista diferente. Para algunos, el Comité de Comercio y Medio Ambiente estaría abriendo la puerta; para otros, la estaría cerrando. El Canadá había expresado su deseo de asegurar que los PMP no relacionados con productos no superaran el contexto de los programas voluntarios de etiquetado ecológico. Otra preocupación era la que se refería al término "normas internacionales" utilizado en el proyecto de Decisión. El debate sobre esta cuestión se había concentrado en el uso de la ISO 14000 como un ejemplo de trabajo en materia de normas internacionales en esta esfera, en vista de las preocupaciones por el grado en que la ISO reflejaba un consenso internacional. Teniendo en cuenta esta preocupación, el Canadá había propuesto, sin éxito, que la UNCTAD convocara una reunión de un grupo de expertos para examinar esta cuestión. Cualquiera que fuera la opinión general del Canadá sobre la ISO, debía reconocerse el impacto que la ISO 14000 tenía sobre el mercado. La participación de la industria en la reciente reunión del Comité Técnico 207 de la ISO indicaba el grado en que la industria confiaba en la ISO para elaborar tales normas a fin de responder a las necesidades del mercado. Este impacto debía ser examinado conjuntamente por el Comité de Comercio y Medio Ambiente y el Comité del OTC. La referencia hecha por el Canadá a las normas internacionales en el proyecto de Decisión no era limitada en vista del trabajo que se estaba realizando en la Red Mundial de Etiquetado Ecológico y del establecimiento de normas de gestión ambiental sectoriales. Si bien el Canadá no objetaba el examen de las normas nacionales sobre la base del análisis del ciclo de vida tal como lo había sugerido una delegación, la referencia a las normas internacionales era adecuada por las razones antes expuestas. Esta era una respuesta a las críticas hechas a la propuesta del Canadá (WT/CTE/W/21-G/TBT/W/21) de que los programas de etiquetado ecológico se elaboraran de conformidad con directrices convenidas multilateralmente que estaban todavía en proceso de preparación. En vista de que esas directrices, en forma de principios de orientación, metodologías y procedimientos en vez de valores o indicadores específicos, probablemente entrarían en vigor durante el próximo mandato del Comité de Comercio y Medio Ambiente, por lo cual era apropiado examinar sus posibles efectos.

18. Algunas delegaciones habían preguntado si los programas voluntarios de etiquetado ecológico eran instrumentos efectivos de política basados en el mercado para fomentar los productos y servicios ambientalmente preferibles. Algunos habían sugerido un análisis de sus efectos comerciales, a pesar de que en las monografías de la UNCTAD y en el Programa 21 se hacía referencia a ellos. Si bien el éxito de los programas de etiquetado ecológico no era completo, algunos habían demostrado tener efectos sobre el mercado. Era posible seguir realizando otros análisis, pero esto no debería impedir una acción sobre la notificación básica y disciplinas conexas. Algunos países en desarrollo habían expresado preocupación por las dificultades con que tropezaban las empresas pequeñas y medianas de esos países en lo que respecta a los programas de etiquetado ecológico. Al igual que todas las demás normas, el problema para este tipo de empresas en todos los países, especialmente en los países en desarrollo, era más difícil que para las grandes empresas, pero no debía exagerarse el efecto del etiquetado ecológico. La experiencia obtenida con el programa de etiquetado ecológico del Canadá, compartida por el programa Nordic Swan, era que los productores no necesitaban conocer los procedimientos del programa de etiquetado ecológico puesto que era el importador el que proporcionaba la relación necesaria con el programa. Las consultas celebradas con expertos en etiquetado ecológico sobre los problemas de los exportadores de los países en desarrollo, en especial en el sector textil, habían revelado que si bien los exportadores de estos países eran sumamente reacios a la utilización de PMP no relacionados con los productos, se adaptaban a los requisitos del mercado. El problema era de transparencia y de posibilidad de participar en la selección del grupo de productos y de criterios de productos, que era la finalidad del Código de Buena Conducta del OTC.

19. Una preocupación justificada de muchos países en desarrollo era la necesidad de contar con más tiempo para adaptarse a los nuevos requisitos del mercado planteados por los programas de etiquetado ecológico. Un ejemplo era el de la reglamentación técnica alemana que prohíbe el uso de los colorantes

azo en los tejidos (G/TBT/Notif.93.312). Este PMP no relacionado con productos no había sido objetado por los países más interesados, y en cambio su industria había decidido adaptarse a él. Probablemente este hecho reflejaba que el país importador daba a los exportadores afectados la posibilidad de hacer observaciones y aplazaba la fecha de aplicación para dar tiempo a los exportadores a adaptarse. Algunas monografías habían demostrado el criterio práctico adoptado por las industrias de los países en desarrollo. El Comité de Textiles de Bombay había asumido una función "proactiva" prestando asesoramiento a las empresas del Comité sobre la manera de adaptarse a los requisitos del etiquetado ecológico (véase *Eco-labelling and other environmental quality requirements in textiles and clothing: indications for developing countries*, Centro Internacional de Comercio, 1996). Un importante mayorista y minorista indio del sector de los textiles, Ramlal Durgadutta and Co., organizó una "colección ecológica" de telas y comprobó que "el costo de la producción aumentaba sólo marginalmente pero la imagen y la confianza en el producto mejoraba considerablemente", lo que a su vez aumentaba la rentabilidad. La conclusión preliminar del Canadá era que las actuales disposiciones del artículo 12 del Acuerdo OTC eran suficientes para hacer frente a las preocupaciones prácticas de los exportadores de países en desarrollo, especialmente en lo que se refería a la necesidad de contar con más tiempo para adaptarse a los nuevos requisitos del mercado. Para poder aplicar el artículo 12, era necesario reconocer que los programas de etiquetado ecológico entraban en el ámbito general del Acuerdo OTC. Una vez dado este primer paso, el Canadá no se opondría a que se estudiara si se necesitaban disposiciones adicionales en un programa de trabajo posterior a Singapur, junto con el examen del reconocimiento mutuo y la equivalencia. Una delegación había señalado la falta de una disposición de equivalencia en el Código de Buena Conducta en contraste con la obligación relativamente débil del artículo 2.7 del Acuerdo OTC. En el Examen Trienal del OTC se estudiarían los problemas de la equivalencia para el Acuerdo OTC y el Código de Buena Conducta puesto que se trataba de una cuestión genérica. En el Canadá, los practicantes del etiquetado ecológico se estaban ocupando de la cuestión de la equivalencia y otros problemas afines. El PNUMA y la UNCTAD podrían desempeñar también un papel a este respecto. Se había sugerido que el Comité de Comercio y Medio Ambiente estudiara en qué forma los programas de etiquetado ecológico llevaban a cabo el análisis del ciclo de vida en su selección de criterios sobre productos. Se había hecho una distinción entre análisis completos del ciclo de vida y enfoques más aproximados del ciclo de vida y una parte del trabajo futuro podría consistir en un examen de la forma en que estos últimos se aplicaban en la elaboración de criterios sobre productos. En lo que se refería a la asistencia técnica, el CCI tenía un programa activo que trataba de aspectos prácticos de los programas de etiquetado ecológico y requisitos conexos, como parte de sus seminarios de seguimiento de la Ronda Uruguay.

20. Era importante lograr resultados concretos sobre el etiquetado ecológico en Singapur. Sería irónico que el Comité de Comercio y Medio Ambiente no se ocupara del punto que tenía efectos más inmediatos sobre el comercio. El ponerse de acuerdo solamente sobre la realización de nuevos análisis demostraría a la comunidad comercial que el Comité no abordaba seriamente las consecuencias comerciales de las políticas relativas al medio ambiente que obligarían quizás a establecer un grupo especial que se ocupara de estas cuestiones. En efecto, ese grupo de trabajo determinaría la política sólo con la aportación de las partes (y quizás de las terceras partes) en la controversia. Los miembros del Comité de Comercio y Medio Ambiente deberían dar orientaciones normativas a los futuros grupos especiales sobre las cuestiones relacionadas con el etiquetado ecológico. A falta de esta orientación normativa, el Canadá entendía el *status quo* de la manera siguiente: i) se consideraría que los programas de etiquetado ecológico, voluntarios u obligatorios, entraban en el ámbito general del Acuerdo OTC y del Código de Buena Conducta. Esta posición significaba que la concesión de etiquetado ecológico era análoga al establecimiento de normas y que los órganos que concedían el etiquetado ecológico eran una forma de órgano de normalización. Tal como lo había señalado Australia, la Decisión del Comité OTC de que una etiqueta estaba cubierta por el Acuerdo OTC, cualquiera que fuera la información contenida en la etiqueta (o detrás de ella), sería probablemente un factor importante; ii) en el caso de los programas voluntarios de etiquetado ecológico, el ámbito de aplicación del Acuerdo OTC respecto de los PMP no relacionados con productos podría no ser muy claro dada la ambigüedad de la definición de las normas. Dependiendo del caso y del carácter de las presentaciones del grupo especial, el grupo especial podría considerar esta cuestión definiendo si un determinado criterio de etiquetado ecológico basado en un PMP no relacionado con productos era discriminatorio, y no necesariamente si era un PMP no relacionado con productos; y iii) el establecimiento de normas internacionales basadas en el análisis del ciclo de vida, tales como

la ISO 14000, podría servir de base para la presunción sólo de derecho de que cualquiera de estas normas no creaba un obstáculo innecesario al comercio internacional (artículo 2.5). Puesto que las normas de la ISO eran normas de gestión relativas al cumplimiento de requisitos de política local, probablemente el problema giraría en torno de la determinación de si el etiquetado ecológico de que se trataba era discriminatorio y no si se basaba total o parcialmente en PMP relacionados con productos.

21. El representante de los Estados Unidos dijo que la opinión de su delegación era que el Acuerdo OTC se aplicaba a los programas de etiquetado ecológico. La propuesta de los Estados Unidos estaba dirigida a lograr un compromiso en relación con la transparencia, sin prejuzgar las opiniones de los miembros sobre el alcance. Este hecho era importante para quienes estimaban que debía hacerse más en términos de obligaciones claras y para quienes pensaban que deberían cumplirse mejor las obligaciones existentes. Los seis elementos en la elaboración de un etiquetado ecológico, enumerados en la propuesta de los Estados Unidos, que exigían la transparencia, podían no ser todos ellos etapas independientes, y era por esta razón que la propuesta señalaba que podían producirse de manera separada o simultánea.

Cuarto Punto Las disposiciones del sistema multilateral de comercio con respecto a la transparencia de las medidas comerciales utilizadas con fines ambientales y las medidas y prescripciones ambientales que tienen efectos comerciales significativos

22. El representante de Noruega dijo que esta cuestión había sido ya examinada extensamente, incluso en el grupo EMIT, y que ahora sería posible presentar las siguientes recomendaciones a los ministros: i) todo nuevo mecanismo de transparencia debería vincularse a las disciplinas actuales; ii) deberían evitarse los requisitos de notificación que pudieran dar lugar a una duplicación de otras disposiciones de la OMC u otros foros; iii) debería solicitarse a los foros pertinentes de la OMC que mejoren el cumplimiento de las obligaciones de notificación existentes respecto de las medidas ambientales relacionadas con el comercio; iv) debería solicitarse de la Secretaría que proporcionara una compilación actualizada de las notificaciones existentes como referencia para los miembros; y v) deberían notificarse las medidas adoptadas de conformidad con el artículo XX.

23. El observador del Centro de Comercio Internacional (CCI) dijo que el CCI trabajaba con instituciones de promoción del comercio y con el sector comercial para fomentar el comercio de los países en desarrollo y de las economías en transición. El CCI mantenía bases de datos sobre productos y mercados, compradores y vendedores, calidad de la exportación, embalaje para la exportación y disposiciones jurídicas que rigen el comercio exterior. Como las medidas de protección ambiental influían cada vez más en el comercio de los países en desarrollo, el CCI había recibido el mandato de emprender un trabajo sobre el comercio y el medio ambiente a fin de: i) proporcionar información sobre medidas ambientales relacionadas con el comercio para facilitar la adaptación de los exportadores de los países en desarrollo y de las economías en transición a los requisitos ambientales previstos en los mercados internacionales; y ii) encontrar oportunidades comerciales para los exportadores de los países en desarrollo y de las economías en transición, por ejemplo, la comercialización verde y la adquisición verde. Como un primer paso el CCI estaba estudiando la elaboración de una base de datos sobre medidas ambientales relacionadas con el comercio, que aprovecharía la información disponible en las notificaciones a la OMC. El CCI presentaría su propuesta para establecer una base de datos disponible para las delegaciones interesadas.

Sexto Punto El efecto de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, especialmente en lo relativo a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, y los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio

24. El representante del Japón dijo que el debate sobre este punto debería tener una base amplia, ser objetivo y no destacar solamente el sector agropecuario. Era inaceptable que en el Informe se adoptara una descripción demasiado simple, en el sentido que la eliminación de las medidas de distorsión del comercio sólo tendría efectos ambientales positivos. Estos efectos no se producirían automáticamente

mientras no se establecieran políticas ambientales apropiadas, y los efectos ambientales de la liberalización del comercio podían ser diferentes según los sectores y los países.

25. El representante de la Argentina dijo que había una contradicción inherente cuando se sostenía que el comercio libre y la protección ambiental se apoyaban mutuamente, mientras que al mismo tiempo se negaba que las distorsiones del comercio no tuvieran efectos ambientales negativos. La Argentina estaba dispuesta a discutir otros sectores además de la agricultura en el marco de este punto.

26. El representante de Australia convino en que el debate sobre la relación entre la liberalización del comercio y la protección ambiental debería tener una base amplia. En el documento de Australia (WT/CTE/W/36) se había citado a la agricultura como un ejemplo, pero el Informe debería incluir otros sectores para los trabajos que se realicen en el futuro. La relación entre la eliminación de las distorsiones del comercio y el medio ambiente era compleja y era necesario adoptar medidas ambientales adecuadas para hacer realidad los beneficios ambientales de la liberalización del comercio. El Informe debería refutar firmemente que existiera un conflicto entre los objetivos de la liberalización del comercio y la protección ambiental.

27. El representante de Corea dijo que si bien en principio la liberalización del comercio contribuía a la protección del medio ambiente, había casos en que si no existían políticas ambientales apropiadas la liberalización del comercio podría exacerbar la protección del medio ambiente, tal como se había indicado en el documento WT/CTE/W/1. De esa manera, no había contradicciones inherentes en la declaración del Japón puesto que las medidas que distorsionan el comercio, por ejemplo las subvenciones, podrían en ciertos casos contribuir a la protección del medio ambiente.

28. El representante de Nueva Zelanda dijo que el hecho de que la liberalización del comercio no se traduciría en todos los casos en la protección del medio ambiente indicaba que era necesario proceder a un análisis más detenido.

29. El representante de Noruega dijo que el documento no oficial de su delegación (de 20 de junio de 1996) había citado la energía como un ejemplo de un sector que podría producir un doble beneficio, razón por la cual la liberalización del comercio podría entrañar ganancias ambientales y económicas. El Comité de Comercio y Medio Ambiente debería estudiar si estas situaciones de "sin perdedor" existían en otros sectores. La agricultura era un ejemplo concreto. El Acuerdo sobre la Agricultura había iniciado una reforma agrícola importante, y era necesario esperar todavía para conocer sus efectos. Era necesario contar con más experiencia en el proceso de reforma de la agricultura antes de poder sacar conclusiones sobre el carácter de una mayor liberalización. Noruega apoyaba las conclusiones generales del documento no oficial de las Comunidades Europeas (de 23 de julio de 1996) sobre la relación entre los beneficios ambientales y la reforma agraria. Noruega estaba de acuerdo en que debía procederse de manera equilibrada y reconocer y analizar las preocupaciones no comerciales vinculadas con la agricultura, incluida la conservación de los recursos de tierras agrícolas, el paisaje natural y los procesos ecológicos, la seguridad de la biodiversidad y una utilización sostenible de los recursos.

30. El representante de las Comunidades Europeas dijo que sobre este punto no existían diferencias importantes que no pudieran conciliarse. En los casos en que existieran esas diferencias, debían reconocerse.

31. El representante de los Estados Unidos declaró que el documento de su delegación (WT/CTE/W/35) había subrayado que en el macro nivel la liberalización contribuía a la protección del medio ambiente mediante la creación de riqueza y abordando los problemas de las distorsiones del comercio que interferían con la internalización de los costos, por ejemplo, las políticas relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales. Las complejidades de esta relación se habían reconocido en la propuesta hecha por los Estados Unidos en favor de la realización de exámenes ambientales, un instrumento que los países podrían utilizar para hacer frente a estas situaciones complejas. Aunque los Estados Unidos no habían sugerido que se examinara cualquier otro sector, el debate debía caracterizarse no sólo por la amplitud de principios, sino que debía basarse en determinados sectores en los que existía la

posibilidad de que las reformas relacionadas con el comercio se tradujeran en el mejoramiento del medio ambiente. Se había prestado más atención a la agricultura puesto que este sector había sido objeto de un mayor número de análisis.

Octavo Punto Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y el medio ambiente

32. El representante de Australia presentó el documento no oficial de su delegación (de 11 de setiembre de 1996) en el que se determinaban varias cuestiones planteadas por la relación entre el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y los objetivos ambientales con fines de un nuevo examen.

33. El representante de los Estados Unidos dijo que su delegación presentaría sus observaciones sobre el documento no oficial revisado de la India (de 20 de junio de 1996) relativo al Acuerdo sobre los ADPIC, que no había presentado razones convincentes para realizar nuevos trabajos sobre la relación del Acuerdo sobre los ADPIC con el desarrollo y la transferencia de tecnologías y productos ecológicamente racionales (TER/P) y el acceso a los mismos. No había pruebas suficientes de que existiera un conflicto entre las normas de propiedad intelectual (PI) establecidas por el Acuerdo sobre los ADPIC, las obligaciones de los AMUMA, y la transferencia de TER/P. Los Estados Unidos no estaban de acuerdo con la tesis de que existían o podían plantearse problemas en relación con el uso y la disponibilidad de TER/P patentados que pudieran atribuirse al Acuerdo sobre los ADPIC. La experiencia de los Estados Unidos indicaba que no se planteaban problemas importantes con la difusión de TER/P patentados en los países que habían establecido sistemas de propiedad intelectual compatibles con los ADPIC. El documento no oficial de la India no examinaba la fuente de los problemas que pudieran existir en relación con la transferencia de TER/P, tales como reglamentaciones ambientales, el clima para las inversiones extranjeras y las condiciones de mercado, que tenían un efecto mayor y más directo que la propiedad intelectual. En el documento no oficial no se reconocía que la carencia de un sistema efectivo de propiedad intelectual en un país podía hacer que los titulares de TER se sintieran menos inclinados a transferirlos a ese país. El documento no oficial de la India contenía cierto número de inexactitudes. Como se había señalado en el Comité de Comercio y Medio Ambiente y en la reunión de julio del Consejo del Acuerdo sobre los ADPIC, varios artículos del Acuerdo indicaban claramente que un miembro no podía revocar patentes TER/P y seguir siendo compatible con las obligaciones previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC. La interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC en la forma sugerida por la India anularía todas las obligaciones de la sección de patentes. El artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC obligaba a los países a extender derechos de patentes por las invenciones en todos los campos de la tecnología, con excepción de los sectores indicados expresamente en el artículo 27.3, puesto que esas invenciones eran nuevas, entrañaban una actividad inventiva y podían ser objeto de aplicación industrial. Los derechos de patente deberían concederse sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos fueran importados o producidos en el país. Si las patentes pudieran revocarse por cualquier razón, el artículo 27.1 contendría una obligación sin sentido. Los artículos 27, 29 y 32 indicaban que la única base para revocar una patente era el incumplimiento de las normas de patentes y toda decisión de revocar una patente sobre esa base podía ser objeto de apelación. El incumplimiento de las condiciones del artículo 62 podía traducirse también en la revocación de una patente, pero también esta decisión podía ser objeto de apelación.

34. En el documento no oficial de la India (de 19 de julio de 1996) relativo a los objetivos de la transferencia de tecnología en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) se sugería que la frase "en condiciones justas y en los términos más favorables", que figura en el artículo 16.2 del CDB, significaba condiciones "preferenciales y no comerciales"; esta interpretación no se justificaba. El artículo 16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica trata de las "tecnologías pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica o que utilicen recursos genéticos y no causen daños significativos al medio ambiente", que constituían un subgrupo de TER. La obligación se aplicaba a "cada Parte Contratante" y no solamente a los países desarrollados, y la obligación no era "dar o facilitar acceso o transferir a otras Partes Contratantes". Esta obligación podía cumplirse facilitando la transferencia de tecnología. El documento no oficial de la India dejaba de lado la segunda frase del artículo 16.2 del

Convenio sobre la Diversidad Biológica en el que se aclaraba que el esfuerzo que haga un país para facilitar la transferencia de tecnología patentada debe ser compatible con una protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual establecida por el Acuerdo sobre los ADPIC. Ninguna disposición del Convenio obligaba a los países desarrollados a proporcionar a los países en desarrollo tecnologías patentadas de propiedad del sector privado en "condiciones preferenciales y no comerciales".

35. En el documento no oficial de la India se interpretaba erróneamente la referencia en el documento WT/CTE/W/22 a la posibilidad de copiar las tecnologías. Algunas tecnologías eran más susceptibles que otras a una utilización indebida mediante copias hechas por terceras partes sin la autorización del titular del derecho. En el documento no oficial de la India se convierte el debate sobre la relativa facilidad con que cierto tipo de tecnología puede ser utilizada indebidamente mediante "copia", en una sugerencia de que la utilización no autorizada era un comportamiento legítimo promovido por los Miembros de la OMC, lo cual es erróneo. El documento no oficial de la India sugería que se debilitase el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC de manera que la concesión obligatoria de licencias sirviera de instrumento para garantizar una rápida transferencia de tecnología, sin tener en cuenta los derechos de patente. De esta manera se deja de lado el propósito del artículo 31, que es evidente en vista de las restricciones que pone a la disponibilidad de esas licencias, propósito que consiste en dar a los gobiernos medios de corrección específicos y limitados para hacer frente al uso abusivo de una patente por el propietario de dicha patente, y al mismo tiempo impidiendo el abuso de estos mismos derechos por los gobiernos a expensas del titular de la patente. Las disposiciones del artículo 31 que la India citaba en su documento no oficial como obstáculos a la transferencia de tecnología eran la piedra fundamental del marco establecido para garantizar que los gobiernos no violen los derechos de los titulares de patentes. El documento no oficial de la India sugería que las Partes que trataran de obtener licencias sobre tecnologías patentadas y secretos comerciales deberían en primer lugar apelar a su gobierno, y no al propietario de la tecnología, y que se debería dar a los gobiernos la autoridad para dejar de lado las consideraciones económicas de sus acciones. Este procedimiento se traduciría probablemente en una disminución de la labor de investigación y desarrollo dedicada a la elaboración de TER. El documento no oficial de la India sugería una situación "sin perdedores" si el Acuerdo sobre los ADPIC se modificara para permitir que los miembros redujeran el período de protección para los titulares de patentes de TER a menos de 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud indicada en el artículo 33. Este procedimiento sería contrario tanto a los intereses del titular de la patente como a los intereses del público. El titular de la patente tendría un período más breve de derechos exclusivos para recuperar los costos de investigación y desarrollo y tendría que aumentar el precio del producto o hacer frente a una pérdida de ingresos para poder continuar la investigación y el desarrollo. El público pagaría precios más elevados o descubriría que se elabora un número menor de estas tecnologías y productos. Nada indicaba que el problema de los derechos indígenas mencionados en el documento no oficial de Australia guardaba relación con el Acuerdo sobre los ADPIC. Esta opinión no se debería prejuzgar en el Informe.

36. El representante de Suiza dijo que el Acuerdo sobre los ADPIC había entrado en vigor sólo recientemente y sus disposiciones serían aplicables plenamente a los países Miembros en desarrollo sólo después de un período de transición de cinco años. El objetivo del Acuerdo sobre los ADPIC no era proteger el medio ambiente. Sin embargo, el artículo 27.3 permitía excluir de la patentabilidad a las invenciones que pudieran causar graves daños al medio ambiente. Esta disposición sería examinada nuevamente en enero de 1999. La protección de los derechos de propiedad intelectual era indispensable para alentar el desarrollo de nuevas tecnologías y TER y facilitaría la transferencia de tecnología al ofrecer cierta seguridad a las empresas que invierten en el extranjero o exportan sus productos más recientes. La obligación de reemplazar ciertas tecnologías que causan daño al medio ambiente con tecnologías y recursos ecológicamente racionales, tales como las que figuraban en algunos AMUMA, podría entrañar costos de aplicación para los países en desarrollo y las pequeñas y medianas empresas. La solución de estos problemas no consistía en disminuir la protección de la propiedad intelectual, sino en medidas positivas tales como las que figuran en el Protocolo de Montreal, entre ellas la financiación de la sustitución y transferencia de tecnologías apropiadas. Podría alentarse la transferencia de tecnologías nuevas, más ambientalmente racionales y la adopción de diversas medidas que favorecerían las inversiones independientemente de los sistemas de propiedad intelectual. Suiza estimaba que no existía una contradicción entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y que no

había nada en el Acuerdo sobre los ADPIC que fuera contrario al Principio 2 de la Declaración de Río. Por consiguiente, no era necesario modificar el Acuerdo sobre los ADPIC para tener en cuenta las preocupaciones de carácter ambiental.

37. El representante de la India se refirió a las observaciones hechas al documento no oficial de su delegación sobre la transferencia de tecnologías y productos ecológicamente racionales (de 20 de junio de 1996). Se refirió a la observación hecha en el sentido de que estos problemas no existían para la difusión de TER/P en el caso de los países que habían establecido un sistema de propiedad intelectual compatible con los ADPIC, y que estos problemas tendían a producirse como consecuencia de los obstáculos a las inversiones extranjeras y al comercio de estos productos. El problema consistía en saber si un país que tenía la capacidad interna para utilizar ciertas tecnologías y era autosuficiente en la producción de ciertos productos que posteriormente debían eliminarse gradualmente de conformidad con un AMUMA, debería depender desde entonces de las importaciones y modificar su estructura industrial y comercial en estos sectores como consecuencia de dicho AMUMA. Preguntó cuál era entonces el sentido de "responsabilidades comunes pero diferenciadas", o "en condiciones justas y en los términos más favorables". Preguntó de qué manera debían hacerse realidad estos términos salvo mediante el Acuerdo sobre los ADPIC, que era la única legislación comercial internacional sobre la materia. La verdadera fuente y la solución de estos problemas dependía del Acuerdo sobre los ADPIC, y el Comité de Comercio y Medio Ambiente ofrecía a los miembros la oportunidad de conciliar la protección ambiental con los derechos de propiedad intelectual. Debía facilitarse la relación entre estos dos objetivos. Había muchos factores que afectaban la transferencia de tecnología, pero en el caso de TER/P patentados el factor fundamental era la protección de la propiedad intelectual. Los solicitantes buscaban y obtenían la protección mundial mediante el Acuerdo sobre los ADPIC puesto que se consideraba que la protección del derecho de propiedad era importante. Si los TER/P de que se trataba fueran de dominio público, esta protección del derecho de propiedad podría no ser un factor fundamental. Sin embargo, cuando existía un control muy estrecho de las tecnologías era necesario encontrar una solución para ponerlas a disposición, con fines de protección ambiental, de los países que no tenían acceso a ellas en "condiciones justas y en los términos más favorables".

38. El documento no oficial de la India ponía de relieve las contradicciones entre las disposiciones de los AMUMA y el Acuerdo sobre los ADPIC y sugería que cuando la legislación internacional o nacional obligaba a utilizar ciertos TER/P debería fomentarse la copia o la retroingeniería para lograr una mayor difusión de su utilización, especialmente si no era obligatorio transferirlas en "condiciones justas y en los términos más favorables". Con este propósito podrían utilizarse las disposiciones obligatorias sobre licencias del Acuerdo sobre los ADPIC. La intención de la India era incorporar los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica en el Acuerdo sobre los ADPIC y examinar la transferencia de la tecnología en el contexto de este último Acuerdo puesto que no había sido un tema central de las negociaciones. El documento no oficial de la India relativo al Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (de 19 de julio de 1996) trataba de incorporar las preocupaciones del Convenio en el Acuerdo sobre los ADPIC a fin de conciliar sus objetivos. Trataba de cuestiones relacionadas con el Convenio sobre la Diversidad Biológica distintas del problema de la transferencia de tecnología, que se examinaba en el documento no oficial revisado de la India relativo al Acuerdo sobre los ADPIC y la transferencia de tecnología (de 20 de junio de 1996). El problema que se planteaba era determinar si los derechos soberanos de un país sobre sus recursos genéticos estaban protegidos adecuadamente por el Acuerdo sobre los ADPIC, que era el único acuerdo que podía tratar la cuestión relativa a lo que sucedía con los beneficios obtenidos de la explotación comercial del material biológico indígena y los conocimientos tradicionales de los países en desarrollo. Este era el problema que la India deseaba tratar dentro del contexto del artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. El documento no oficial de Australia planteaba cuestiones similares a las indicadas por su delegación pero desde un punto de vista diferente. La India apoyaba el último párrafo del documento no oficial de Australia y el Informe debería tratar de tener en cuenta las ideas que contenía.

39. El representante de los Estados Unidos dijo que en el contexto de un AMUMA podría haber un objetivo común en el sentido de que una determinada tecnología era perjudicial para el medio ambiente y debía ser eliminada gradualmente. El AMUMA no trataba de la ventaja comparativa de un país, pero se

había llegado a la conclusión de que existía un problema ambiental. En efecto, este hecho cambiaba el mercado porque era necesario modificar un determinado tipo de conducta que causaba daños ambientales. Era difícil aceptar que la OMC debería ocuparse de cambios del mercado que fueran resultado de la realización de objetivos ambientales diferentes de los otros factores del mercado que daban lugar a esos cambios. Era difícil aceptar la propuesta de la India de incorporar elementos del Convenio sobre la Diversidad Biológica en el Acuerdo sobre los ADPIC. La OMC debería apoyar las actividades de otras organizaciones y no obstaculizar los esfuerzos destinados a hacer frente a los problemas ambientales de manera multilateral, pero la OMC no era una organización que se ocupara de cuestiones ambientales y carecía de la competencia necesaria para incluir los objetivos de un AMUMA en los acuerdos de la OMC.

40. El representante de Cuba dijo que, como un comentario preliminar al documento no oficial de Australia, su delegación apoyaba su último párrafo.

Décimo Punto Aportación a los órganos correspondientes en lo que respecta a arreglos apropiados para establecer relaciones con las organizaciones no gubernamentales mencionadas en el artículo V de la OMC

41. Como resultado de la Decisión del Consejo General de 18 de julio de 1996 sobre "Directrices para conceder la condición de observador a las organizaciones intergubernamentales en la OMC" (WT/L/161/Rev.1), el Comité de Comercio y Medio Ambiente decidió conceder la condición de observador con carácter permanente a las organizaciones intergubernamentales a las que se había concedido previamente la condición de observador sobre una base *ad hoc*.

42. El representante de los Estados Unidos consideró que este punto era importante y expresó su satisfacción por la decisión del Consejo General (WT/L/160) sobre "Directrices relativas a arreglos sobre las relaciones con las organizaciones no gubernamentales (ONG)" destinadas a fomentar la interacción entre la OMC y las ONG, especialmente en la esfera del medio ambiente.

43. El Presidente recordó que la Secretaría organizará, el 26 y 27 de septiembre y el 3 de octubre, dos reuniones de información no oficiales para las ONG que se ocupan de cuestiones relacionadas con el comercio y el medio ambiente.

44. El Presidente recordó el acuerdo adoptado por el Comité de Comercio y Medio Ambiente en el sentido de que el Presidente distribuyera un proyecto de la Sección III del Informe para su examen y en preparación de la aprobación por el Comité de todo el Informe en la reunión del 24 y 25 de octubre.